

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CALI-VALLE

Sentencia de Tutela de Primera Instancia No. 20

Radicación:	76001-31-87-005- 2025-00127 , T-366464
Accionante:	KARLIN ADRIANA MOSQUERA BONILLA
Afectado:	LA ACCIONANTE
Accionado:	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – UNIVERSIDAD LIBRE – UT CONVOCATORIA FGN 2024
Decisión:	PETICIÓN - IMPROCEDENTE

Santiago de Cali, quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)

I.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO.

Resolver lo pertinente en la ACCIÓN DE TUTELA presentada por la señora KARLIN ADRIANA MOSQUERA BONILLA, incoada en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA Y LA UT CONVOCATORIA FGN 2024, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso e igualdad para ocupar cargos públicos.

II.- HECHOS

Refiere la accionante que la Fiscalía General de la Nación -UT CONVOCATORIA FGN 2024, abrió convocatoria mediante el Acuerdo 001 de 2025 para concurso de méritos en las modalidades de ascenso e ingreso, operado por la Universidad Libre, procediendo a inscribirse para el cargo de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, quedando registrada con número de inscripción 0154267, código de empleo I-104-M-01-(448), modalidad ingreso.

Relata que inconforme con los resultados obtenidos procedió a elevar la respectiva reclamación dentro del término establecido para ello, sin embargo, considera que la respuesta que le fue ofrecida no fue de fondo ni clara.

Por lo anterior considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, petición, igualdad, entre otros y solicita se amparen los mismos. De igual forma demanda que se le ordene a la Fiscalía General de la Nación que corrija el tiempo de experiencia, que corresponde a 08/22 meses y no de 04/22 meses, como también tenga como válida la certificación laboral aportada para el empleo denominado como OFICIAL MAYOR– JUZGADO DÉCIMO PENAL CIRCUITO – RAMA JUDICIAL y adicione de acuerdo con las tablas No. 08, 09 y 10 de la Guía de Orientación al Aspirante para la Prueba de Valoración de Antecedentes (VA).

III.- ACTUACIÓN PROCESAL

Una vez recibida las actuaciones, este operador judicial procedió a emitir auto sustanciatório No. 1967 del 31 de diciembre de 2025, admitiendo la acción constitucional y otorgando el término de **un (1) día** para que las entidades accionadas y vinculadas se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la acción y allegaran las pruebas y documentación relacionada con la reclamación. Advirtiéndose que en caso de no recibirse respuesta se daría aplicación a lo previsto en el artículo 20 del D.2591/1991.

IV. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

A- UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

La UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, a través del Dr. DIEGO HERNÁN FERNÁNDEZ GUECHA, en su calidad de apoderado especial de la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2024, indicó que la accionante, interpuso reclamación en contra de los resultados de la prueba de V.A., de manera que ejerció su derecho a la defensa y contradicción en la oportunidad procesal establecida para tal fin.

Señala que no es cierto que se hubiesen modificado los meses de experiencia del certificado expedido por CIS- ALCALDÍA DE MEDELLÍN, pues lo que se hizo en aras de beneficiar la valoración de sus documentos fue duplica el folio y tomar 4 meses y 22 días para la asignación de puntaje en el ítem de “EXPERIENCIA PROFESIONAL”, y los otros 4 meses se valoraron en el ítem de “EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA”.

Así mismo que, frente al certificado expedido por la Rama Judicial, en el cual manifiesta que para ese momento la accionante se desempeñaba como oficial mayor de circuito, no fue tenido en cuenta para la asignación de puntaje pues no especifica si ese ha sido el único cargo desempeñado por MOSQUERA BONILLA, ni si con anterioridad ejerció otros cargos distintos al certificado, lo cual es contrario al artículo 18 del Acuerdo de la convocatoria que establece los criterios para la revisión documental

Indica que sí hubo una respuesta clara, concreta, congruente y de fondo a la inconformidad presentada por la accionante, pues se le explicó de manera detallada lo que había ocurrido con los dos certificados de experiencia laboral frente a los cuales presentó la reclamación, tal como se hizo en la presente acción de tutela

Finalmente, manifiesta que no se configuró vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad ni el de acceso a cargos públicos, dado que el concurso de ha

desarrollado con apego total a la constitución, a la ley, al decreto ley 020 de 2014, el acuerdo 001 de 2025 y demás normas que lo regulan. No se le ha brindado a la accionante un trato diferenciado injustificado frente a las personas que se encuentran en idénticas situaciones fácticas y jurídicas, ya sea una discriminación positiva o negativa. Por último, recuerda que la participación de la accionante en el concurso no significa que hay adquirido derecho alguno para acceder a los empleos ofertados a través del mismo.

Por todo lo anterior, solicita que se declare la improcedencia de la presente acción constitucional, pues ni la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ni la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2024, han vulnerado los derechos fundamentales de la actora.

B.- SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA COMISIÓN DE CARRERA ESPECIAL

La doctora YAZMÍN ADRIANA TAMARA RUBIANO, subdirectora nacional de apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la FGN, precisa que los asuntos relacionados con los concursos de méritos de la Fiscalía General de la Nación, competen a la Comisión de la Carrera Especial, a la cual le corresponde definir los aspectos técnicos, procedimentales y normativos, bajo los cuales se desarrollan los concursos o procesos de selección para la provisión de las vacantes definitivas que se encuentran en la planta de personal de la entidad, motivo por el cual, se denota la falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza de la Fiscal General de la Nación, para actuar dentro de la presente acción constitucional, pues no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de los derechos invocados por la accionante en esta acción constitucional.

Señala que la presente tutela es improcedente dado que la accionante dispuso de los medios o recursos administrativos idóneos para controvertir los resultados preliminares de la prueba de valoración de antecedentes, los cuales fueron publicados el 13 de noviembre de 2025, a través de la aplicación SIDCA3. Indica que lo pretendido por la señora KARLIN ADRIANA MOSQUERA BONILLA, en crear una nueva instancia frente a la prueba de valoración de antecedentes, pues la etapa de reclamaciones ya culminó, haciendo uso indebido del trámite constitucional, pues ya presentó una reclamación dentro de los términos establecidos para tal fin.

Informa que acceder a lo pretendido por la accionante, sería violar el reglamento del concurso de méritos, así como los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y transparencia de los demás participantes que cumplieron las normas del concurso y presentaron su reclamación dentro de los plazos señalados.

V- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

A. COMPETENCIA.

El despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela con fundamento en lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, con la reglamentación del artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

La tutela es una acción consagrada por el ordenamiento constitucional, cuyo objeto de protección está determinado por el propio artículo 86 de la Carta Política, cual es la defensa inmediata de los DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES. Ella procede ante amenazas o vulneraciones a dichos derechos, por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, siempre y cuando los instrumentos judiciales normales no tengan las

mismas posibilidades de intervenir con la suficiente presteza en el mantenimiento del orden jurídico respecto de una determinada persona en particular.

B. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde al despacho establecer si la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA Y LA UT CONVOCATORIA FGN 2024 vulneraron o están vulnerando el derecho fundamental de petición a la accionante KARLIN ADRIANA MOSQUERA BONILLA, al no dar respuesta oportuna, clara y de fondo al derecho de a la reclamación presentada el día 20 de noviembre de 2025, relacionada con la verificación de antecedentes del concurso de méritos de la FGN. Así mismo, corresponde determinar si, a partir de los hechos expuestos, se configura una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a ocupar cargos públicos a la accionante al no acceder a la reclamación antes indicada.

C. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, creó la acción de tutela como un mecanismo expedito y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos previstos en la Ley.

Dentro de esos derechos fundamentales, se destaca el de Petición que consiste, según el artículo 23 de la Constitución Política, en que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Respecto a este derecho, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes pautas:

1. El derecho de petición concreta la facultad constitucionalmente protegida de toda persona de dirigirse a las autoridades -o a los particulares en los casos autorizados por la ley- para obtener información y respuesta oportuna a sus solicitudes; por tanto, las entidades destinatarias de una petición adquieren **la obligación** correlativa de atenderla de manera rápida, diligente y eficiente en los términos previstos en la ley.
2. Como derecho, su desconocimiento permite exigir judicialmente su respeto. Y al tratarse de un derecho fundamental, su protección es posible a través de la acción de tutela.
3. El derecho de petición forma parte de los mecanismos de participación y control ciudadano y, por tanto, guarda relación directa con otras garantías constitucionales, tales como los derechos a obtener información, participar en política y expresarse libremente.
4. La respuesta a la petición debe ser oportuna y resolver de fondo lo solicitado en forma clara, precisa y congruente¹ y, por tanto, la persona no debe asumir las consecuencias de la desorganización administrativa y del manejo y registro inadecuado de la correspondencia y de las peticiones.² Por lo mismo, si bien no es jurídicamente reprochable informar el estado de la solicitud o el trámite que se le ha dado, dicha circunstancia no permite entender que la petición ha sido atendida, que con ello se

¹ Sentencia T-377 de 2000, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, reiterada en las Sentencias T-1089 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T- 373 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

² Sentencias T-096 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-487 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.

extienden los plazos legales para decidir o que la entidad destinataria se libera de la obligación de elaborar y comunicar una respuesta de fondo.³

5. **La respuesta, positiva o negativa debe ser efectivamente comunicada al peticionario.** Así debe demostrarlo quien tiene a su cargo el cumplimiento de esa obligación. La omisión de tal diligencia constituye una vulneración del derecho fundamental de petición de la misma entidad que el hecho de no dar respuesta, pues si lo decidido no se da a conocer al interesado, el efecto en uno y otro caso es el mismo desde el punto de vista de la insatisfacción del derecho.⁴
6. El destinatario de la respuesta es el peticionario, es decir, la persona que a través de su solicitud ha entablado una relación jurídica con el destinatario de la petición. En consecuencia, las respuestas o informaciones entregadas al juez de tutela o a otras autoridades para responder requerimientos oficiales no satisfacen el derecho de petición si no son comunicadas directamente al interesado.⁵

Las peticiones presentadas por personas en estado de debilidad manifiesta, indefensión o vulnerabilidad requieren de una atención reforzada, acorde con la situación específica de quien acude a las autoridades a solicitar la protección de un derecho o el cumplimiento de una función pública. Si la satisfacción del derecho de petición es un deber funcional en sí mismo -a tal punto que su inobservancia constituye falta disciplinaria-, con mayor razón lo será cuando su atención está relacionada con el cumplimiento de funciones y deberes específicos del Estado en materia de protección de personas o grupos que por su condición física, mental o económica, requieren una protección especial y reforzada (art. 13 Constitución Política).

D. DEL DEBIDO PROCESO EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE MÉRITOS Y ASPECTOS JURISPRUDENCIALES RELACIONADOS CON LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

El artículo 29 de la Constitución Política establece el principio al debido proceso, el cual establece:

*“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
(...)”*

En aplicación de dicha disposición constitucional, para el caso de los concursos públicos de méritos, las entidades encargadas de realizarlos deben dar a conocer la normativa aplicable para el caso de los aspirantes y permitirles ejercer su derecho a la defensa en cada una de las etapas en las cuales se desarrollen.

Es por lo anterior que en el acto que reglamente cada una de las convocatorias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y con el fin de proteger el derecho a la defensa y

³ “Igualmente esta Corte ha dicho que la mera información del estado del trámite o el número del turno dado a la solicitud presentada por el interesado no constituye una respuesta efectiva y de fondo y, por tanto, si la administración resuelve sólo en este sentido se entiende violado el derecho de petición.” (Sentencia T-495 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Igualmente, Sentencia T-628 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis).

⁴ “Cabe recordar que en relación con el derecho de petición, no basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que ésta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.” (Sentencia T-249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández). En la Sentencia T-545 de 1996 también se había señalado: “Aunque la solicitud fue atendida oportunamente por la entidad, la falta de una efectiva comunicación a la peticionaria, vulnera su derecho fundamental de petición, que no se reduce únicamente a que la entidad resuelva, sino que requiere, además la notificación de la decisión al interesado.” (M.P. Antonio Barrera Carbonell.)

⁵ “2. La respuesta que la entidad demandada dio a la petición de la demandante a través del escrito de contestación de la acción de tutela, no se compadece con los criterios resaltados por esta Corte en los acápites anteriores. Según lo tiene establecido la Corte una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado.” (Sentencia T-912 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería. En el mismo sentido sentencias T-991 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-886 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-259 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas, entre otras).

contradicción de los aspirantes, se establecen los parámetros que deben seguirse, las etapas del concurso y los mecanismos para interponer las reclamaciones pertinentes.

Frente al debido proceso en la ejecución de concursos públicos, la Corte Constitucional ha expuesto⁶:

“(...) el concurso público es el mecanismo establecido por la Constitución para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público, a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo.

4.3. Ahora bien, el concurso de méritos al ser un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir responsabilidades, se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional (artículo 29 Superior)⁷.

Para cumplir tal deber, la entidad encargada de administrar el concurso de méritos elabora una resolución de convocatoria, la cual contiene no sólo los requisitos que deben reunir los aspirantes a los cargos para los cuales se efectúa el concurso sino que también debe contener los parámetros según los cuales la misma entidad administrativa debe someterse para realizar las etapas propias del concurso, así como la evaluación y la toma de la decisión que concluye con la elaboración de la lista de elegibles. Hacer caso omiso a las normas que ella misma, como ente administrador expida, o sustraerse al cumplimiento de éstas, atenta contra el principio de legalidad al cual debe encontrarse siempre sometida la administración, así como también contra los derechos de los aspirantes que se vean afectados con tal situación.

(...)

4.4. Entonces, a manera de síntesis, la Sala concluye que la resolución de convocatoria se convierte en la norma del concurso de méritos y, como tal, tanto la entidad organizadora como los participantes deben ceñirse a la misma. En caso de que la entidad organizadora incumpla las etapas y procedimientos consignados en la convocatoria, incurre en una violación del derecho fundamental al debido proceso que les asiste a los administrados partícipes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa.

E. DEL CASO CONCRETO

En relación con el derecho fundamental de petición, se encuentra acreditado que la señora KARLIN ADRIANA MOSQUERA BONILLA presentó una reclamación el día 20 de noviembre de 2025, a través de la aplicación SIDCA3, con relación a la verificación de antecedentes del concurso de méritos de la FGN. En tal sentido, se evidenció de lo aportado por ella, así como de las respuestas emitidas por las accionadas a este trámite tutelar, que dicha reclamación fue atendida de fondo, pues se dio respuesta de manera clara, concreta y congruente, además de detallada y con sustento legal a la inconformidad de la actora, por lo que no encuentra procedente este estrado judicial, conceder dicho derecho cuando ya se contaba con una respuesta, incluso antes de acceder a la acción de

⁶ Ver Sentencia T-093 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

⁷ En sentencia T-514 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte señaló que “el debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician con el objeto de cumplir una obligación o de ejercer un derecho ante la administración, como es el caso del acceso a los cargos públicos”.

tutela, pues que la respuesta no sea favorable a sus intereses, no quiere decir que exista una vulneración.

En cuanto al derecho al debido proceso, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la acción de tutela no constituye un trámite adicional ni una segunda instancia de los procedimientos administrativos. Así mismo, ha indicado de manera clara que los concursos de méritos se rigen por la resolución de convocatoria que señala los requisitos que deben cumplir los aspirantes, así como los parámetros a los cuáles debe someterse la entidad para realizar las etapas del concurso.

Así las cosas, encontramos que en la respuesta brindada a la accionante se señala de manera clara el artículo 18 de la resolución 001 de 2025, en el cual se establece:

“(…) ARTÍCULO 18. CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL. En virtud del principio de igualdad, los aspirantes inscritos en el concurso, tanto para la modalidad de ingreso, como para la modalidad de ascenso, deberán cargar en la aplicación web SIDCA 3 durante el término establecido para la etapa de inscripciones, toda la documentación con la que pretendan acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos y las condiciones de participación, y la que pueda ser puntuada en la prueba de Valoración de Antecedentes y para su validez, deberán contener las siguientes formalidades:

Experiencia: La experiencia se acredita mediante la presentación de constancias escritas expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones públicas o privadas.

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes datos:

- *Nombre o razón social de la entidad o empresa;*
- *Nombres, apellidos e identificación del aspirante;*
- ***Empleo o empleos desempeñados dentro de la empresa, precisando fecha inicial (día, mes y año) y fecha final (día, mes y año) de cada uno de los cargos ejercidos;***
- *Tiempo de servicio con fecha inicial y fecha final (día, mes y año);*
- *Relación de funciones desempeñadas;*
- *Firma de quien expide o mecanismo electrónico de verificación.*

PARÁGRAFO. *Los documentos de educación y de experiencia aportados por los aspirantes que no reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidos en cuenta como válidos, por lo cual no serán objeto de evaluación dentro del proceso, tanto en la etapa de verificación de requisitos mínimos, como en la prueba de valoración de antecedentes.*

(Negrilla fuera de texto)

En consecuencia, el juez de tutela no puede ordenar que se tengan en cuenta en la etapa de valoración de antecedentes los certificados de experiencia aportados por la accionante cuando estos no cumplen en debida forma con lo establecido en la resolución que rige el concurso de méritos, pues estaría extralimitando en sus funciones. En ese orden de ideas se concluye que no hay una vulneración al derecho a ocupar cargos públicos, pues las entidades accionadas han cumplido con las etapas establecidas garantizándole a la accionante el acceso en cada una de ellas, incluso respondiendo de manera clara, concreta, precisa y oportuna, la reclamación realizada en punto de su inconformidad.

Frente al derecho a la igualdad invocado por la accionante, se tiene que el mismo no ha sido afectado, pues tal como lo indicaron las accionadas en sus respuestas, no se le brindado un trato diferenciado positivo o negativo de manera injustificada, por el contrario se indica que a todos los participantes que presentaron situación similar a la de la señora MOSQUERA BONILLA, se les dio el mismo trámite, por lo que acceder a lo solicitado la pondría en una clara situación de ventaja frente a los demás, incumpliendo de manera clara

con el mérito, la igualdad de oportunidades, la transparencia, la imparcialidad, la publicidad, la eficiencia, la economía y la moralidad, principios rectores del concurso de méritos.

En mérito de lo expuesto el JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CALI, Administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

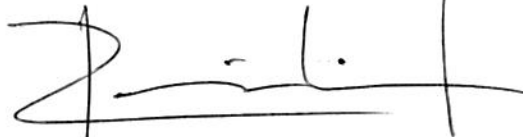
RESUELVE:

PRIMERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional, interpuesta por la señora KARLIN ADRIANA MOSQUERA BONILLA, incoada en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA Y LA UT CONVOCATORIA FGN 2024, de conformidad con lo anotado en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. - NOTIFIQUESE este proveído a las partes y al vinculado tal como lo ordena el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. - Si la presente providencia no fuera impugnada remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iván Camilo Peña Loiza', written over a horizontal line.

**IVÁN CAMILO PEÑA LOIZA
JUEZ**